



**Consejo Económico y
Social**

Distr.
GENERAL

E/1993/83
9 de junio de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Período de sesiones sustantivo de 1993
Ginebra, 28 de junio a 30 de julio de 1993
Tema 4 del programa provisional

CUESTIONES DE COORDINACION

Régimen común de las Naciones Unidas

Nota de la Secretaría

1. En su decisión 1993/211, de 12 de febrero de 1993, el Consejo Económico y Social decidió iniciar en su período de sesiones sustantivo de 1993 un debate sobre los acuerdos de relaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones miembros del régimen común de las Naciones Unidas.
2. La información que figura en el anexo a la presente nota se ha extraído de los informes de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondientes a 1991¹ y 1992² relativos a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General 45/268, de 29 de junio de 1991, y 46/191B, de 31 de julio de 1992 sobre el régimen común de las Naciones Unidas y se pone a disposición del Consejo como material de apoyo al debate sobre la cuestión.

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 30 (A/46/30), vol. I.

² Ibíd., cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 30 (A/47/30).

Anexo

A. EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION
PUBLICA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A 1991

C. Resolución 45/268 de la Asamblea General: régimen común de las Naciones Unidas y régimen de pensiones de las Naciones Unidas

16. El 21 de junio de 1991, la Asamblea General, en su cuadragésimo quinto período de sesiones, decidió considerar nuevamente los temas del programa 127 y 128 relativos al régimen común de las Naciones Unidas, y al régimen de pensiones de las Naciones Unidas, respectivamente. La Asamblea asignó a la Quinta Comisión el examen de esos temas, y ésta consideró la decisión adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 78ª reunión de dar curso a su propuesta de establecer una carga de ahorro voluntario para pensiones. La Quinta Comisión consideró asimismo la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de poner en práctica unilateralmente un seguro de protección del poder adquisitivo de las pensiones, así como la decisión del Secretario General de la UIT de conceder un subsidio por funciones especiales a los funcionarios del cuadro orgánico y con categoría de Director en la sede.

17. La Asamblea General en su resolución 45/268, de 29 de julio de 1991, expresó su preocupación por las consecuencias que podrían tener para el régimen común y para el régimen de pensiones de las Naciones Unidas las mencionadas decisiones de la OIT y de la UIT, y pidió a la Comisión y al Comité Mixto de Pensiones que, en el contexto de sus respectivos programas de trabajo en la materia, examinasen las bases de las decisiones adoptadas por dichas organizaciones y sus consecuencias para el régimen común, y le presentaran, en su cuadragésimo sexto período de sesiones, un informe sobre el particular. La Asamblea reiteró su petición a la Comisión y al Comité Mixto de que se asegurasen, como cuestión de la mayor prioridad, de que los informes solicitados en la resolución 45/241, relativa al régimen común, y en la resolución 45/242, de 21 de diciembre de 1990, relativa al régimen de pensiones de las Naciones Unidas estuvieran disponibles para ser examinados plenamente en el cuadragésimo sexto período de sesiones de la Asamblea.

18. La Comisión ya había tratado la cuestión de la caja de ahorro voluntario de la OIT en su período de sesiones de marzo de 1991. En cuanto a la decisión adoptada por la UIT respecto del seguro de protección del poder adquisitivo de las pensiones, la Comisión señaló que el Comité Mixto de Pensiones se había ocupado de la cuestión con arreglo a su mandato. La Comisión examinó la cuestión de los subsidios por funciones especiales para funcionarios de la UIT en su período de sesiones de agosto.

1. Caja de ahorro voluntario para funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo

19. Como se indicó más arriba, la Comisión llevó a cabo el examen sustantivo del tema en su período de sesiones de marzo de 1991. En los párrafos 20 a 31 que siguen se ofrecen pormenores de ese examen.

/...

Opiniones del representante de la Organización Internacional del Trabajo

20. El representante de la OIT subrayó que, al establecer el plan de ahorro, el órgano rector de la OIT no había tenido la intención de crear para su personal una nueva condición de servicio en pugna con las disposiciones del régimen común sino, muy al contrario, ajustarse más plenamente a éste en relación con uno de sus elementos fundamentales, como lo eran las pensiones. Añadió que la OIT, con arreglo a la interpretación dada por el Tribunal Administrativo a una de las disposiciones del Estatuto del Personal (cláusula 3.1.1.), tenía en la actualidad autonomía en cuanto a la definición de la remuneración pensionable y era responsable ante el Tribunal de la OIT de cualquier cambio en la definición. En consecuencia, recientemente se habían efectuado a más de 300 jubilados de la OIT pagos complementarios por cuantías muy considerables en relación con las pensiones debido a una divergencia temporal entre la escala de la remuneración pensionable de las Naciones Unidas y la escala de la OIT. Ello podría tener consecuencias aún más graves en el futuro. Así pues, el órgano rector de la OIT había estimado que la OIT debía renunciar a la autonomía en lo relativo a la definición de la remuneración pensionable. Sin embargo, por motivos políticos y jurídicos, la OIT no podía eliminar lo que su personal había considerado que constituía un importante elemento de sus condiciones de servicio sin prever, a cambio de ello, alguna clase de indemnización, lo cual, a su vez, haría que resultase más difícil impugnar ante el Tribunal la enmienda al Estatuto del Personal.

21. El único elemento que podía tener cierta repercusión para el régimen común era el fondo de dotación, por una cuantía de hasta 4.875.000 dólares, que debía ser confirmado por la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, al respecto había que tener en cuenta que las ventajas (limitadas) derivadas de dicho fondo de dotación para los funcionarios en servicio activo constituían una indemnización por la pérdida de la ventaja considerable que podrían obtener con arreglo a la actual definición de la remuneración pensionable en el Estatuto del Personal de la OIT, según la interpretación que le había dado el Tribunal Administrativo de la OIT. Así pues, tal vez pudiera atenderse a las posibles objeciones al fondo de dotación si el Comité de Gestión, al dar término a las normas que regirían el plan de ahorro, aclarase que el fondo de dotación debería ser utilizado únicamente para mejorar las condiciones ofrecidas a los funcionarios que estuviesen en servicio activo al enmendarse la cláusula 3.1.1.; en tal sentido se acogerían con beneplácito las opiniones de la Comisión.

22. Por último, el representante de la OIT destacó que el plan de ahorro era de interés tanto para la OIT como para la CAPI, pues ambas deseaban eliminar la situación anómala en que se había encontrado la OIT, y corregir la anomalía sin correr el riesgo de juicios. Al respecto, en definitiva, el éxito del plan de ahorro constituía un elemento vital sin el cual la OIT tal vez se viese obligada irreversiblemente a volver a la anterior anomalía.

Deliberaciones de la Comisión

23. Respondiendo a un miembro de la Comisión que había preguntado si la decisión del Consejo de Administración de la OIT era definitiva o requería la confirmación de la Conferencia General, el representante de la OIT declaró que la Conferencia General tendría que aprobar los fondos necesarios para el plan. Se expresó la opinión de que el establecimiento de la caja de ahorro voluntario,

/...

a la que harían aportaciones los Estados miembros, entrañaría el pago de una indemnización relacionada con la modificación del Estatuto del Personal de la OIT. Ello, a su vez, significaría un aumento de las prestaciones de jubilación del personal de la OIT, lo cual colocaría a la OIT en una posición de ventaja respecto de las demás organizaciones que aplicaban el régimen común.

24. La Comisión observó que, en atención a una recomendación del Comité Mixto de Pensiones, todas las organizaciones, con excepción de la OIT, habían introducido enmiendas en sus respectivos estatutos del personal, con arreglo a las cuales en cada estatuto se hacía referencia el artículo 54 de los Estatutos de la Caja de Pensiones, en el que figuraba la definición de la remuneración pensionable para todos los cuadros del personal. Sin embargo, la OIT no había seguido ese camino y había mantenido la definición de remuneración pensionable para todos los cuadros del personal en la cláusula 3.1.1. de su Estatuto. Por lo tanto, la Comisión consideraba que las dificultades a que hacía frente la OIT eran consecuencia directa de la mencionada decisión, adoptada por la administración de esa organización en 1980.

25. Algunos miembros tomaron nota de las circunstancias especiales en que se encontraba la OIT, pero expresaron preocupación por el hecho de que la administración de la OIT no hubiese sometido antes la cuestión a la Comisión. A su juicio, la administración de la OIT debería haber comunicado a la Comisión todos los detalles del problema a que hacía frente y de la solución propuesta antes de que el Consejo de Administración adoptase una decisión definitiva. También se señaló que los representantes de la OIT que habían participado en la labor de la Comisión desde el 8 de marzo de 1991 no le habían informado de una decisión adoptada por el Consejo de Administración el 4 de marzo de 1991. La Comisión se había enterado de la decisión del Consejo de Administración de la OIT por una carta de fecha 4 de marzo dirigida al Presidente de la Comisión por el Director General de la OIT y recibida en Nueva York el 22 de marzo, mientras la Comisión estaba reunida en la sede de la UNESCO, en París.

26. El Presidente de la Comisión informó a los miembros de que, si bien la carta del Director General de la OIT en la que se le informaba de la decisión del Consejo de Administración había sido recibida en fecha reciente, el Director General se había puesto en contacto con él en relación con esa cuestión en el mes de febrero. En la oportunidad, el Presidente había informado a la administración de la OIT de que, en virtud de las disposiciones estatutarias pertinentes, no estaba en condiciones de adoptar una decisión ni de presentar las opiniones de la CAPI sobre la proyectada caja de ahorro voluntario. Esas opiniones sólo podrían ser formuladas por la Comisión en su conjunto y, por lo tanto, había sugerido al Director General de la OIT que solicitase la inclusión de la cuestión en el programa del período de sesiones en curso. Sin embargo, la OIT no había pedido que se incluyera la cuestión en el programa del 33º período de sesiones. En consecuencia, la cuestión se había planteado ya muy avanzado el período de sesiones de la Comisión, al recibirse la carta del Director General de la OIT, de fecha 4 de marzo.

27. Se expresó la opinión de que los órganos legislativos de las organizaciones eran autoridades soberanas y, por ende, tenían derecho a enmendar los estatutos del personal de las organizaciones. Era la primera vez que una organización se encontraba en la situación de tener que pagar una indemnización por enmendarse una cláusula del estatuto del Personal.

28. La Comisión señaló que el Consejo de Administración de la OIT hacía frente a un problema delicado. Asimismo, señaló que la cuestión había sido objeto de difíciles deliberaciones. No obstante, la Comisión hubiera preferido que la administración de la OIT le hubiese sometido la cuestión antes de que el Consejo de Administración adoptase una decisión al respecto. La Comisión ahora se encontraba frente a una decisión ya adoptada y, en la medida en que no había participado en la adopción de la decisión final, no podía formular observaciones sobre los elementos sustantivos del plan. Sin embargo, consideraba que, puesto que el plan de ahorro voluntario se establecía en el contexto de la enmienda de la cláusula 3.1.1., relativa a la definición de la remuneración pensionable, y las consecuencias de dicha enmienda para el personal, no había justificación alguna para conceder las prestaciones previstas con arreglo al plan de ahorro a quienes asumiesen funciones en la OIT después de la fecha en que se había introducido la enmienda, es decir, después del 27 de febrero de 1991. Algunos miembros de la Comisión opinaban que debía establecerse un plazo para la existencia de la caja, y que dicho plazo debería ser tan corto como fuese posible. En cuanto a la aportación de los Estados miembros al plan de ahorro, se tomó nota de que se tenía previsto que la cuantía de 4.875.000 dólares sería una aportación por una única vez.

29. La Comisión declaró que la decisión del Consejo de Administración de la OIT no debía ser invocada ni por la OIT ni por ninguna otra organización como precedente para el establecimiento de planes similares.

30. La Comisión señaló que sus observaciones y conclusiones no debían interpretarse en el sentido de que aprobaba la decisión del Consejo de Administración de la OIT relativa al establecimiento de la caja de ahorro voluntario para el pago de prestaciones. Al respecto, recordó que la Comisión había sido establecida para regular y coordinar las condiciones de servicio de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que aplicaban el régimen común. En ese mandato estaba implícito que la Comisión velaría por que se aplicasen condiciones de servicio equitativas al personal de todas las organizaciones.

Conclusiones de la Comisión

31. La Comisión llegó a las siguientes conclusiones:

a) La administración de la OIT se había encontrado en una situación delicada en relación con la enmienda de la cláusula 3.1.1. del estatuto del Personal de la OIT. Además, la administración de la OIT estaba tratando de aplicar el régimen común respecto de la definición de la remuneración pensionable. La decisión del órgano rector de la OIT de establecer una caja de ahorro voluntario para el pago de prestaciones de pensiones era el resultado de difíciles negociaciones entre todas las partes interesadas;

b) Por otro lado, la Comisión tenía ante sí una decisión que el Consejo de Administración había adoptado sin consultar previamente a la Comisión;

c) La Comisión tomaría nota de la decisión del Consejo de Administración de la OIT y expresaría su preocupación al respecto;

d) Asimismo, la Comisión señalaría que el plan de ahorro formaba parte de un conjunto de medidas encaminadas a eliminar definitivamente una seria contradicción en un artículo del estatuto del Personal de la OIT privativo de dicho estatuto y que la decisión de la OIT no debía ser invocada como precedente por otras organizaciones, ni siquiera por la propia OIT;

e) La decisión del Consejo de Administración de la OIT sólo se aplicaría a funcionarios que resultasen afectados por la modificación, con efecto a partir del 27 de febrero de 1991, de la cláusula 3.1.1. del estatuto del personal;

f) La Comisión tomaría nota de que los Estados miembros harían, por una única vez, una aportación de 4.875.000 dólares al plan de ahorro de la OIT.

32. En su período de sesiones de agosto, la representante de la OIT informó a la Comisión de que en su 78ª reunión, celebrada en junio de 1991, la Conferencia Internacional del Trabajo había adoptado una resolución por la que autorizaba la financiación de la caja de ahorro voluntario. También informó a la Comisión de que se había modificado la cláusula del estatuto del personal de la OIT relativa a la definición de la remuneración pensionable. El estatuto de la caja y la cláusula del estatuto del personal habían sido aprobados recientemente por la OIT y presentados a la Comisión.

2. Medidas adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en relación con la concesión de un subsidio por funciones especiales

Opiniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

33. El representante de la UIT informó a la Comisión de que, a raíz de una decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Niza en 1989, se había establecido un comité de alto nivel integrado por representantes de 21 Estados miembros de la UIT para que estudiase cambios básicos en el funcionamiento de la Unión. Se había comunicado al Consejo de Administración de la UIT que se encomendaría al personal del cuadro orgánico y categorías superiores la aplicación de las recomendaciones del Comité y que se proyectaba conceder un subsidio por funciones especiales a los funcionarios de esas categorías que contribuyesen eficazmente a la consecución de esa labor en reconocimiento del trabajo adicional realizado. La administración proporcionó fundamento jurídico para la concesión del subsidio, estipulado en el párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos del Personal de la UIT. El Secretario General de la UIT había escrito a todos los funcionarios para comunicarles su decisión de confiarles tareas adicionales con carácter temporal en el contexto de la aplicación de la recomendación del Comité de alto nivel. Se preveía que ese trabajo adicional no obstaculizaría la labor habitual de los funcionarios.

34. El representante de la UIT añadió que solamente se pagaría el subsidio a los funcionarios que efectivamente realizaran las tareas asignadas. Hasta la fecha no se había efectuado ningún pago; en diciembre de 1991 los supervisores informarían sobre la labor realizada por cada uno de sus subalternos, y sólo entonces se decidiría quién recibiría el subsidio. Todavía no se sabía con exactitud cuántos funcionarios cobrarían el subsidio. En respuesta a una pregunta de un miembro de la Comisión, el representante de la UIT declaró que la

/...

decisión de su organización respecto de los subsidios no era incompatible con el régimen común. El representante añadió que, en su opinión, "régimen común" no significaba "régimen idéntico".

35. El representante de la UIT explicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.8 de los Estatutos, se podían conceder dos tipos de subsidios por funciones especiales. El primero, según el párrafo a) del artículo 3.8, se pagaba a funcionarios elegidos para ocupar un puesto vacante durante un período determinado. Los subsidios propuestos se concederían, en cambio, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 3.8, que se aplicaba cuando se confiaban temporalmente tareas adicionales a los funcionarios, por las que recibían una gratificación en forma de subsidios por funciones especiales a un nivel más alto. El orador añadió que anteriormente ya se habían concedido subsidios de conformidad con dicha disposición.

Opiniones de las organizaciones

36. Respondiendo a preguntas formuladas por varios miembros de la Comisión que deseaban conocer el parecer de las organizaciones en general acerca de las medidas adoptadas por la OIT y la UIT, el Presidente del CCCA dijo que no correspondía al CCCA tomar una posición sobre las medidas concretas adoptadas por un organismo a título individual. Sin embargo, podía considerarse que las medidas adoptadas recientemente por la OIT y la UIT eran sintomáticas de un malestar general que tenía su origen en el constante deterioro de los sueldos y demás condiciones de empleo de los funcionarios de las organizaciones del sistema. Con todo, las organizaciones estimaban que, en lugar de concentrar la atención en las soluciones especiales adoptadas por una organización a título individual, era más importante examinar el funcionamiento general del régimen común en el decenio de 1990. El propio CCCA, en el período de sesiones celebrado recientemente, había efectuado un examen amplio de la naturaleza y los objetivos del régimen común. Una de las conclusiones generales a que había llegado era que el régimen común debía reaccionar con mayor flexibilidad y dinamismo frente a nuevas circunstancias.

Deliberaciones de la Comisión

37. La Comisión señaló que la cuestión que se planteaba como resultado de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la UIT en relación con el seguro de protección del poder adquisitivo de las pensiones había sido abordada por el Comité Mixto de Pensiones en su período de sesiones de julio de 1991 como parte del examen del sistema de ajuste de las pensiones.

38. Respondiendo a la solicitud de la Asamblea General de que examinase la base de la decisión adoptada por la UIT respecto del subsidio por funciones especiales, la Comisión consideró el artículo 3.8 de los Estatutos y Reglamento del Personal de la UIT al respecto. La mayoría de los miembros opinaba que era evidente que las disposiciones del artículo 3.8 no tenían por objeto que se concediesen subsidios por funciones especiales a la totalidad, ni siquiera a la mayoría, de los funcionarios de la UIT. En el mejor de los casos, con arreglo a lo previsto en dicho artículo, ese subsidio podría pagarse a un número muy limitado de funcionarios. Es más, el artículo invocado por el Secretario General de la UIT, es decir, el párrafo b) del artículo 3.8, reflejaba una excepción al principio general al que se hacía referencia en el párrafo a) y

/...

no constituía el principio en sí. Dichos miembros estaban firmemente convencidos de que esa clase de excepciones se preveían con objeto de que se usasen rara vez, a fin de mantener y salvaguardar su especificidad. A ello había que añadir que el párrafo a) del artículo 3.8 se refería claramente a un puesto "existente" de categoría superior cuyas funciones podían ser asumidas temporalmente por un funcionario. Sin embargo, las categorías contempladas en la decisión de la UIT se relacionaban con puestos ya ocupados. Respondiendo a la afirmación del representante de la UIT de que se concedería el subsidio propuesto a funcionarios que desempeñarían funciones a un nivel superior, varios miembros dijeron que no entendían cómo la aplicación de lo previsto en el informe del Comité de alto nivel podía interpretarse en relación con el desempeño de funciones de nivel superior por todos los funcionarios en todas las categorías, la mayoría, o incluso, un número considerable de ellos. Asimismo cuestionaron la pertinencia de asignar las mismas responsabilidades adicionales a dos funcionarios de distinta categoría y de conceder el subsidio por funciones especiales a ambos. Se observó que el subsidio por funciones especiales para el personal de la UIT parecía ser una especie de gratificación en efectivo por desempeño. Resultaba irónico que, entre las recomendaciones formuladas en el informe del consultor, se aconsejase a la UIT que ensayase la concesión de gratificaciones no monetarias por aumento de la productividad y otras clases de mejoras en el rendimiento.

39. Se expresó la opinión de que la decisión relativa al pago de subsidios por funciones especiales había sido adoptada por el Secretario General de la UIT después de que el Consejo de Administración rechazase la propuesta de que se pagase un aguinaldo a todos los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores de la Unión. Al respecto, el representante de la UIT informó a la Comisión de que el Secretario General de la UIT no había presentado al Consejo de Administración la propuesta de que se pagase aguinaldo. En cuanto a los efectos de la decisión de la UIT relativa a la concesión de subsidios por funciones especiales, la mayoría de los miembros de la Comisión opinaba que, puesto que el subsidio se concedería a un número considerable de funcionarios, de hecho representaba un aumento general acordado por el organismo. Así pues, el personal de la UIT se encontraría en una situación más ventajosa que los funcionarios que trabajaban para otras organizaciones del sistema.

40. Un miembro de la Comisión señaló que no todos los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores de la UIT recibirían un subsidio por funciones especiales. Asimismo recordó que varios funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores habían sido adscritos para prestar servicios a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 1965. Todos esos funcionarios habían gozado de condiciones especiales durante la Conferencia, e incluso, por determinadas tareas realizadas después de la Conferencia. Otro miembro señaló que, según el representante de la UIT, los subsidios por funciones especiales que se concederían a funcionarios de la UIT eran de carácter temporal y no todos los funcionarios los recibirían.

41. A continuación, la Comisión pasó a examinar la opinión del Secretario General de la UIT de que la existencia de un régimen común no significaba la aplicación idéntica de todos los procedimientos del régimen común por todas y cada una de las organizaciones, sino que llevaba aparejada cierta flexibilidad, que era necesaria para que una organización pudiera adoptar medidas de excepción encaminadas a resolver los problemas específicos que pudiese tener. Al

respecto, señaló la referencia que se hacía en el documento A/3209 de la Asamblea General al informe del Comité de Estudio de Sueldos (1956). La UIT había tomado como base para su interpretación de las normas del régimen común la opinión del Comité de Estudio de Sueldos contenida en dicho documento. Sin embargo, en el transcurso de las deliberaciones había salido a luz que el informe del Comité de Estudio de Sueldos no había sido aprobado por la Asamblea General y era anterior, en 18 años, a la creación, en 1974, de la CAPI por la Asamblea General. Además, las conclusiones del Comité de Estudio de Sueldos habían sido reemplazadas por las del Comité Especial encargado de examinar el régimen de sueldos de las Naciones Unidas, establecido en 1972.

42. En general, se opinó que se habían usado el Estatuto y el Reglamento del Personal de la UIT para fines que nunca se había proyectado darles. Así, la Unión se había apartado, a sabiendas y deliberadamente, del régimen común. Ello había sucedido como resultado de darse una interpretación altamente subjetiva a la forma en que funcionaba el régimen común y lo que éste significaba. Además, esa interpretación estaba basada en material anacrónico y ajeno a la cuestión.

43. Varios miembros observaron que, debido a la diversidad de sus programas de trabajo, las organizaciones hacían frente a problemas específicos que debían ser resueltos mediante soluciones especiales. Muchos de los organismos especializados tropezaban con graves dificultades para contratar y retener funcionarios calificados de ciertos grupos ocupacionales que cumplían tareas altamente técnicas. Debía darse a esos problemas una solución a nivel del régimen común, permitiendo, no obstante, cierto grado de flexibilidad en el marco del régimen actual. Medidas unilaterales como las de la UIT no constituían una solución a esa clase de dificultades.

44. La Comisión opinó que la decisión de la UIT de conceder subsidios por funciones especiales a sus funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores era incompatible con el concepto de régimen común.

Decisiones de la Comisión

45. La Comisión:

a) Deploró sinceramente la medida unilateral adoptada por la UIT, medida que era contraria a las normas del régimen común;

b) Expresó preocupación por el hecho de que la UIT hubiese adoptado esa decisión sin consultar previamente a la Comisión ni a su Presidente;

c) Afirmó que la medida unilateral adoptada por la UIT no sentaba un precedente, e invitó a las organizaciones a que, en relación con la búsqueda de una solución a todos los problemas con que tropezaban, celebraran consultas con la Comisión a fin de velar, de ese modo, por que se aplicasen las normas del régimen común;

d) Invitó a todas las organizaciones a que colaboraran plenamente con la Comisión respecto de todas las cuestiones que formaban parte del mandato que se le había conferido en su estatuto.

B. EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION
PUBLICA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A 1992

C. Resolución 46/191B, sección II: Medidas adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones respecto de la concesión de un subsidio por funciones especiales

31. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 46/191B, de 31 de julio de 1992, pidió a la Comisión de Administración Pública Internacional que evaluara los efectos que surtiría para el régimen común la resolución R.1024 del Consejo de Administración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en cuanto al pago del subsidio por funciones especiales, a la interpretación de los reglamentos del personal y a la convocación del grupo tripartito de consulta fuera del marco del reglamento de la CAPI y que le recomendase en su cuadragésimo séptimo período de sesiones las medidas que fueran procedentes que adoptase. La Asamblea también pidió a la Comisión que propusiese las medidas que deberían tomar todas las organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas para acatar y cumplir el régimen común de sueldos, prestaciones y condiciones de servicio.

32. Cabe recordar que las medidas adoptadas por la UIT en relación con la concesión de un subsidio por funciones especiales fueron examinadas por la Comisión en su período de sesiones del tercer trimestre de 1991 en respuesta a lo solicitado por la Asamblea General en su resolución 45/268, de 28 de junio de 1991. Los detalles de las deliberaciones celebradas por la Comisión en 1991 en relación con este tema figuran en su 17º informe anual 4/. En suma, la Comisión había lamentado sinceramente las medidas unilaterales adoptadas por la UIT por considerarlas incompatibles con el régimen común. La Asamblea General había hecho suya esa opinión en su resolución 46/191.

Opiniones de la UIT

33. El representante de la UIT invitó a la Comisión a que tomara nota de que el Consejo de Administración de la UIT, en su resolución R.1024, de 8 de julio de 1992, había aceptado las opiniones de la Comisión, que la Asamblea General de las Naciones Unidas había hecho suyas, con respecto a las medidas adoptadas por la UIT en aplicación del párrafo b) del artículo 3.8 de sus Estatutos. En tal sentido, informó a la Comisión de que, durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 1991, el 90% aproximadamente de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores habían desempeñado las tareas adicionales que se les habían encomendado y habían percibido el subsidio por funciones especiales. Según lo dispuesto en mayo de 1991, seguirían cumpliendo tareas adicionales durante el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de julio de 1992, y existía el compromiso jurídico de conceder el subsidio por funciones especiales correspondiente a los funcionarios que efectivamente hubiesen cumplido las tareas adicionales. Sin embargo, no se proyectaba efectuar un nuevo pago del subsidio con posterioridad a los dos ya efectuados. El representante de la UIT dio seguridades a la Comisión de que el pago de un subsidio por funciones especiales con arreglo a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 3.8 había cesado el 31 de julio de 1992 y de que el Secretario General de la UIT no proyectaba proponer nuevos pagos con arreglo a dicho artículo.

34. El representante de la UIT invitó a la Comisión a que tomase nota de que el Consejo de Administración de la UIT había invitado a la CAPI, en su carácter de órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a enviar representantes en las reuniones de la UIT como parte de la delegación de las Naciones Unidas, que asistía a ellas en calidad de observador. A fin de que la Comisión pudiese asistir a las reuniones de la UIT por derecho propio, habría que modificar el Convenio de la UIT. También invitó a la Comisión a que participase en los trabajos del grupo tripartito de consulta establecido por el Consejo de Administración de la UIT para estudiar distintas cuestiones relacionadas con el régimen de sueldos de los funcionarios del cuadro orgánico.

Deliberaciones de la Comisión

35. La Comisión señaló que, si bien la decisión de conceder un subsidio por funciones especiales a los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores de la UIT se había tomado antes de que la Comisión y la Asamblea General examinasen la cuestión, la aplicación había tenido lugar después de que ambos órganos hubiesen expresado su enérgica oposición a la medida prevista.

36. Se señaló que el Consejo de Administración de la UIT, en su resolución R.1024, había aceptado la opinión de la Comisión, que la Asamblea General había hecho suya, de que las medidas adoptadas por la UIT respecto de un subsidio por funciones especiales eran incompatibles con el régimen común, y había resuelto que toda ulterior aplicación del párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos se ajustase estrictamente al texto de dicho artículo, respondiese plenamente a las disposiciones del régimen común y no contraviniese las opiniones ya expresadas al respecto por la Asamblea General y la CAPI. Ello significaba que el Consejo de Administración de la UIT había reconocido que la decisión del Secretario General de la UIT de conceder un subsidio por funciones especiales estaba en desacuerdo con las disposiciones del párrafo b) del artículo 3.8. La Comisión celebraba que el Consejo de Administración hubiera reconocido ese hecho, pero consideraba que la consecuencia lógica y correcta de ello habría sido que adoptase medidas tangibles para corregir la situación suspendiendo el segundo pago, en lugar de permitir que se efectuase. A juicio de la Comisión, la decisión de efectuar el segundo pago del subsidio con arreglo al párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos era desafortunado en extremo.

37. Al respecto, se señaló asimismo que, con arreglo al párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos de la UIT, el Secretario General estaba autorizado a pagar un subsidio por funciones especiales durante un período de seis meses como máximo. Sin embargo, en mayo de 1991 el Secretario General de la UIT había tomado la decisión de pagar el subsidio durante dos períodos de seis meses cada uno. Ello constituía una nueva y deliberada transgresión de las disposiciones de dicho artículo y era de por sí incompatible con el principio fundamental para el pago de los subsidios por funciones especiales.

38. A continuación, la Comisión consideró la petición de la Asamblea de que propusiese las medidas que deberían ser tomadas por todas las organizaciones para acatar y cumplir el régimen común de sueldos, prestaciones y condiciones de servicio. A su juicio, la medida más eficaz en tal sentido sería que se invitase a la Comisión a asistir a las reuniones de los órganos rectores de todas las organizaciones que participaban en el régimen común cuando en ellas se examinasen propuestas relativas a sueldos, prestaciones, subsidios y demás

condiciones de empleo. La Comisión recordó que en el pasado había formulado recomendaciones similares a las organizaciones. Sin embargo, para que la Comisión pudiese estar plenamente segura de que sería invitada a participar en dichas reuniones, la Asamblea General debería determinar que todas las organizaciones tenían la obligación de cursar esa clase de invitaciones. La Comisión reconocía que para ello tal vez hubiese que modificar los instrumentos de constitución de algunas organizaciones, pero señaló que, a menos que la Asamblea insistiese en que las organizaciones adoptasen esas medidas, en el futuro podrían plantearse nuevamente problemas de índole similar.

39. La Comisión opinó que a fin de promover una mayor uniformidad entre los reglamentos de las distintas organizaciones era necesario determinar si había graves discrepancias entre ellos, como sucedía en el caso del párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos de la UIT y las disposiciones pertinentes de otras organizaciones en relación con la concesión de subsidios por funciones especiales. Recordó que hacía varios años había iniciado esa clase de investigación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de su estatuto. No obstante, habían surgido otras prioridades, en particular el examen amplio de las condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, así como el examen de la remuneración pensionable y la metodología para los estudios de sueldos de los funcionarios del cuadro de servicios generales, y no le había sido posible llevar a término esa labor. La Comisión opinaba que, a fin de promover la adhesión al régimen común, debía continuar ese trabajo con carácter prioritario. Por lo tanto, pidió a su secretaría que examinase los reglamentos y estatutos del personal de las organizaciones que participaban en el régimen común a fin de determinar la existencia de discrepancias graves entre sus disposiciones y que le informase sobre sus conclusiones en el período de sesiones del tercer trimestre de 1993. La Comisión confiaba contar con la cooperación activa de las organizaciones en el estudio de esa cuestión. Sobre la base del informe que se le presentase, la Comisión sometería recomendaciones apropiadas a la Asamblea General y a los órganos rectores de otras organizaciones que participaban en el régimen común. Algunos miembros opinaron que, a la espera de que se concluyese el estudio mencionado precedentemente, debería recomendarse al Consejo de Administración de la UIT que eliminase el párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos.

40. La Comisión señaló que celebraba que el Secretario General de la UIT la hubiese invitado a enviar representantes al Consejo de Administración y a participar en la labor del grupo tripartito de consulta. A su juicio, ello contribuiría a mantener y fortalecer el régimen común. En cuanto a la propuesta de la UIT de que la CAPI asistiese a las reuniones del Consejo de Administración de la UIT como parte de la delegación de las Naciones Unidas, la Comisión consideraba que ello sería inapropiado, pues la CAPI era un órgano subsidiario de la Asamblea General, con una identidad y un estatuto propios. La Comisión pidió a su Presidente que celebrase las consultas necesarias a fin de aclarar en qué carácter participaría la Comisión.

41. La Comisión señaló que el grupo tripartito de consulta establecido por el Consejo de Administración de la UIT examinaría documentos relacionados con distintos aspectos del régimen de sueldos de los funcionarios del cuadro orgánico, incluidos los problemas de contratación y retención de personal y la posibilidad de establecer un sistema de pagos especiales. En tal sentido, pidió

a la UIT que tomara nota de que ya había comenzado a considerar esa cuestión, que seguiría examinando en su período de sesiones del segundo trimestre de 1993.

42. La Comisión consideraba que, si bien la decisión adoptada por el Secretario General de la UIT en 1991 de conceder un subsidio por funciones especiales con arreglo a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos de la UIT había constituido una violación del régimen común, el hecho de que el Consejo de Administración, en su resolución R.1024 hubiese reconocido que así era, denotaba cierto progreso. Cabía esperar que en el futuro pudiesen evitarse situaciones como la que se estaba examinando mediante la estrecha cooperación entre la Comisión y las organizaciones del sistema, incluida la UIT.

Decisiones de la Comisión

43. La Comisión:

a) Reiteró su profunda consternación respecto de la medida unilateral adoptada por la UIT, medida que era contraria a las normas del régimen común;

b) Deploró que no sólo se hubiese efectuado el primer pago del subsidio por funciones especiales con arreglo a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 3.8 de los Estatutos de la UIT después de que la Comisión y la Asamblea General hubiesen expresado su categórica oposición a esa medida, sino que además se proyectase efectuar un segundo pago;

c) Reafirmó que la adopción por la UIT de esa medida unilateral no debía sentar un precedente;

d) Exhortó a las organizaciones a que, cuando considerasen problemas vinculados a cuestiones comprendidas en el mandato de la Comisión, consultasen con ésta a su debido tiempo para velar por que se aplicasen las normas del régimen común;

e) Decidió efectuar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de su estatuto y con carácter prioritario, un estudio de los estatutos y reglamentos de las organizaciones a fin de determinar la existencia de discrepancias graves entre ellos y de formular recomendaciones apropiadas a la Asamblea General y a los órganos rectores de otras organizaciones;

f) Recomendó a la Asamblea General que dispusiese, con carácter obligatorio, que todas las organizaciones invitasen a la Comisión a enviar representantes a reuniones en que se considerasen propuestas relativas a sueldos, prestaciones, subsidios y demás condiciones de empleo;

g) Aceptó con agradecimiento la invitación de la UIT de participar en sus reuniones, a la espera de que se aclarase en qué carácter lo haría.
